



# XX

JORNADAS DE  
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS DE LA  
FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS - UNNE

# 2024

*2 décadas de ciencia compartida:  
raíces hacia nuevos horizontes*



FACULTAD DE DERECHO  
Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS



XX Jornadas de  
Comunicaciones  
Científicas de la Facultad  
de Derecho y Ciencias  
Sociales y Políticas

UNNE

2024

Dos décadas de ciencia compartida:  
raíces hacia nuevos horizontes

Corrientes - Argentina



**Dirección General**  
Dr. Mario R. Villegas

**Dirección Editorial**  
Dra. Lorena Gallardo

**Coordinación editorial y compilación**  
Esp. Martín M. Chalup  
Abg. M. Benjamin Gamarra

**Asistentes – Colaboradores**  
Lic. Agustina M. Bergadá

**Edición**  
Secretaría de Ciencia y Transferencia  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas  
Universidad Nacional del Nordeste  
Salta 459 • C.P. 3400  
Corrientes • Argentina

Villegas, Mario R.

XX Jornadas de Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas - UNNE / Mario R. Villegas ; Lorena Gallardo ; Martín Miguel Chalup ; compilación de Martín Miguel Chalup ; Mauro Benjamín Gamarra ; coordinación general de Lorena Gallardo ; director Mario R. Villegas ; Lorena Gallardo ; prólogo de Claudia Diaz. - 1a edición especial - Corrientes : Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-6623-05-8

1. Legislación. 2. Normas. 3. Regulación. I. Chalup, Martín Miguel, comp. II. Gamarra, Mauro Benjamín, comp. III. Gallardo, Lorena, coord. IV. Villegas, Mario R., dir. V. Gallardo, Lorena, dir. VI. Diaz, Claudia, prolog. VII. Título.

CDD 340

# EL DEBER DE SEGURIDAD. ORIGEN Y ACTUALIDAD

Silvero Fernández, Carlos; Danuzzo, Ricardo S.

*estudiosilvero@yahoo.com.ar*

## RESUMEN

El origen de la obligación de seguridad se remonta al siglo XIX en Francia, particularmente en la legislación sobre accidentes de trabajo y en el contrato de transporte de personas. Un hito significativo en su desarrollo fue el célebre fallo de la Corte de Casación francesa en el caso "Zbidi Amida v. Compañía General Transatlántico", de 21 de noviembre de 1911. En esta decisión, el Alto Tribunal reconoció la existencia de la obligación de seguridad al considerar que, junto a las obligaciones principales que asumen las partes en un contrato, existe una obligación de conducir al pasajero sano y salvo a su destino; esta obligación está explícitamente reconocida en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, el Artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, y el Artículo 9 del Código Civil y Comercial.

## PALABRAS CLAVE

Deber, seguridad

## INTRODUCCIÓN

El deber de seguridad se desprende del principio de la buena fe, consagrado en el artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), y se establece de manera explícita en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC). Esta normativa impone al proveedor la obligación de evitar cualquier perjuicio a la persona y los bienes del consumidor o usuario en relación con los productos, servicios e instalaciones ofrecidos. Esta obligación excede el deber general de nuestro derecho de "neminem laedere" (no dañar a nadie), al imponer estándares más elevados de protección y seguridad para los consumidores y usuarios.

Como antecedente jurisprudencial relevante fuerza citar el caso "Bianchi", en dicha oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el concesionario vial había incumplido su deber de seguridad al no haber adoptado adecuadas medidas de prevención. La Corte afirmó que, según el derecho vigente en la época del evento dañoso, el vínculo entre el

concesionario y el usuario era contractual y regulado por el Código Civil, estableciendo que la relación entre el concesionario y el usuario es distinta de la que el concesionario tiene con el Estado. Además, el usuario paga un precio o canon para el uso de la ruta y los servicios asociados.

Otro fallo trascendental fue el dictado el 26 de diciembre de 2017, en el caso "Arregui, Diego Maximiliano c/ Estado Nacional", en esa ocasión la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ocupó del tema del deber de seguridad en el contexto de un evento público. El caso surgió a raíz de las lesiones sufridas por una persona en la cara y cabeza durante un festival organizado en la Costanera Sur por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en el marco de la campaña "Stop Sida". El afectado interpuso una demanda contra la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional y la asociación organizadora del evento.

Por lo tanto, resulta absolutamente claro que el deber de seguridad está consagrado en el actual CCCN como además lo está de manera explícita el art. 5 de LDC.

#### MÉTODOS

El método es del tipo cualitativo, se analizaron legislación, jurisprudencia y doctrina, principalmente los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

#### RESULTADOS y DISCUSIÓN

Resulta importante sostener la vigencia del deber de seguridad en nuestro sistema de derecho privado, especialmente su alojamiento en el CCCN de manera directa del art. 9 (Principio de la Buena Fe); en razón de que autores de fuste han sostenido lo contrario, algunos sostuvieron que con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), el deber de seguridad ha perdido su razón de ser, con el argumento de que la figura de la obligación tácita de seguridad tenía una justificación en el antiguo sistema del Código Civil derogado, que diferenciaba entre responsabilidad contractual y extracontractual y que dicha diferenciación permitía utilizar la obligación tácita de seguridad para mitigar la rigidez del sistema y aplicar estándares de responsabilidad objetiva en el ámbito contractual, concluyendo que para el régimen de la responsabilidad unificada del CCCN esta figura ya no resulta necesaria.

Nosotros entendemos que la relevancia de la obligación de seguridad, ya sea expresa o tácita, a menudo se discute en términos de su impacto resarcitorio, pero resulta que este no es el único efecto de su incumplimiento, y en algunos casos, ni siquiera el más importante. La obligación de seguridad también puede ser exigida en su cumplimiento por el acreedor y ser objeto de ejecución forzosa directa, en especie o por un tercero, según lo establece el artículo 730 incisos a y b del CCCN. Además, pueden aplicarse vías indirectas de ejecución compulsiva, como las sanciones conminatorias. Esto sería inconcebible si dicha obligación

no existiera, ya que las vías de ejecución y de compulsión obligacional presuponen la presencia de esta última.

Concluimos que la visión actual del deber de seguridad debe ser claramente progresiva, amplia, integrada plenamente al principio nuclear de la buena en toda relación jurídica, abarcando el más amplio campo de vigencia y plenitud que el caso amerite; ergo, su integración con el principio de buena fe refuerza la justicia y equidad en las relaciones precontractuales, contractuales y pos contractuales, superando visiones estrechas y formalistas que podrían limitar su alcance y efectividad.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Danuzzo, R. (2023). Daños por el incumpliendo en la obligación de seguridad- RIUNNE-

Rinessi, A. J. (2007). El deber de seguridad, Ed. Rubinzal-Culzoni

Pizarro - Vallespinos. (1999). Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Ed. Hammurabi.

Pizarro - Vallespinos. (2024). Tratado de Responsabilidad Civil. Ed. Rubinzal-Culzoni.

Silvero Fernández, C. (2020). Contratos Teoría y práctica. Ed. Contexto-

#### EJE TEMÁTICO DE LA COMUNICACIÓN

Derechos Humanos / Sujetos Vulnerables

#### FILIACIÓN

AUTOR 1: Director/a - PEI-FD 2020/005

AUTOR 2: Docente Investigador - PEI-FD 2020/005